

ca. Vistas las constancias de autos, ante ellas la copia de la acta levantada en Pénjamo por el Gefe militar, que juzgando á Cervantes (á) el Zarco como salteador y plagiarlo, le condenó á muerte; y atendiendo á la sentencia que pronunció el Juez de Distrito denegando el amparo pedido, por cuanto á que de esas constancias aparece que en Noviembre de 1870, Cervantes ha sido juzgado y sentenciado por los delitos de asalto y plagio conforme á la ley de 9 de Abril del mismo año; á que suspensas por esa ley las garantías que señala, no pueden decirse violadas en la persona del quejoso las que reclama; á que la prision que está sufriendo, es la pena á que fué condenado en aquel juicio; y á que extinguiendo esa pena, la autoridad política de Salamanca no ha podido legalmente conceder á Cervantes la libertad que de ella solicitó. Por los fundamentos anteriores expuestos, con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Guanajuato pronunciada á 29 de Julio último, declarándose: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Florentino Cervantes contra los actos que han motivado el presente recurso de amparo.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.
TOMO IV.—PARTE II.

Es copia que certifico. México, 20 de Setiembre de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por los CC. José M. Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael M. Conde, contra la Gefatura política de esta Capital, por violación de las garantías que otorgan el artículo 16, el 14 en su parte final, y la segunda parte del 24 de la Constitución federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que los CC. José M. Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael M. Conde, presentaron á este Juzgado un escrito con fecha 4 del actual, diciendo: que en los dias 19 y 20 de Junio fueron aprehendidos por el C. Gefe político de esta Capital como circuladores de un impreso anónimo, contrario á la vida privada y subversivo del orden público; y pretendiéndose que eran responsables como autores de un impreso mientras no probaran lo contrario, fueron consignados al Juzgado segundo de primera instancia; que el Juzgado se inhibió de conocer poniéndoles á disposicion del Presidente del Ayuntamiento para que reuniese los jurados de imprenta, y habiéndolos declarado culpables el de calificación, sin citarles ni oírles en defensa, interpusieron el recurso de amparo en que se declaró por este mismo Juzgado, que la Justicia de la Union les amparaba y protegía en el goce de las garantías que otorgan los artículos 13, 14 y 20 fraccion quinta de la Constitución, contra los procedimientos del Presidente del Ayuntamiento y de cesion del jurado; que como su detencion se

prolongó mientras tanto, por mas de tres dias, sin que se hubiera dictado auto de formal prision, entablaron nuevo recurso de amparo contra esa detencion arbitraria por violacion de la garantía que otorga el artículo 19 de la Constitucion; que se decretó la suspension del acto reclamado en este último recurso, y despues de requerido su superior inmediato por haber trascurrido los plazos legales sin que la autoridad ejecutora se contuviese en sus procedimientos, mandó esta el día 29, que se les pusiera en libertad bajo de fianza, y extendidas esas fianzas previa informacion de idoneidad, á la vez que les ponia en libertad el Presidente del Ayuntamiento, se les notificó nueva orden de detencion dictada por la Gefatura política y fundada en la misma responsabilidad por el impreso anónimo de que se ha hecho mencion; que ese procedimiento que solo tiene por objeto burlar las decisiones de este Juzgado, violan las garantías que otorgan los artículos 16 y 24 de la Constitucion, y bajo el concepto de que la Gefatura política no vacilaría en castigarles gubernativamente, pedian se decretara la inmediata suspension del acto que nuevamente reclamaban y se les amparase en el goce de las garantías citadas.

Durante la sustanciacion del punto de suspension, la Gefatura política practicó varias diligencias, y con fecha 6 dictó la resolucion que obra transcrita en el oficio de fojas 5 y siguientes, por la que impuso á cada uno de los quejosos la pena de un mes de prision ó cien pesos de multa, como infractores del artículo 42 de la ley de imprenta de 21 de Enero de 1868, y en su comunicacion del día 8 (fojas) manifestó á ese Juzgado que al detener y castigar á los quejosos, no los habia juzgado y sentenciado, sino que habia solamente usado de la facultad gubernativa que concede el artículo 42 de la ley de imprenta; que los quejosos fueron sometidos á los jurados de imprenta como responsables del escrito difamatorio y subversivo del orden público, y

estaban sometidos tambien á la Gefatura, por carecer el impreso de los requisitos que marca el referido artículo 42, y que consisten en la mencion del año de la impresion, de la oficina tipográfica en que se publicó, y del nombre de su propietario; que esas responsabilidades son diversas, no constituyen un solo y mismo delito y conforme á la doctrina del C. Lic. D. Blas J. Gutierrez, en su obra del nuevo código de la reforma, tomo segundo, partida segunda, página 808, procede la multa por la falta de esos requisitos aun cuando los escritos no hayan sido denunciados ó fueren declarados absueltos. Pedido que fué á esa autoridad el informe con justificacion prevenido por el artículo noveno de la ley de 20 de Enero de 1869, contestó (fojas), que reproducia por via de informe la comunicacion mencionada, suplicando que fijara V. su atencion en el impreso que fué adjunto, y agregando que pedida la suspension de solo la detencion de los quejosos, se extendió tambien á la resolusion definitiva de la Gefatura para impedir que se ejecutara, siendo así que los quejosos se habian conformado con ella, y no puede sustanciarse de oficio amparo alguno, ni se habia pedido informe respecto de esa resolusion.

El artículo 102 de la Constitucion previene que los recursos de amparo se seguirán á petición de la parte agraviada, y la ley orgánica de 20 de Enero de 1869 dispone que el individuo que solicita amparo, presentará ante el Juez de Distrito un recurso en el que exprese cual de las tres fracciones del artículo, sirve de fundamento á su queja; de manera que solo puede iniciarse el recurso de amparo por la queja de los individuos; su sustanciacion debe cesar desde el momento en que falta esa queja, porque los agraviados se aparten ó desistan de ella, y el amparo y proteccion de la Justicia federal, solo puede concederse respecto del acto reclamado. En nuestro caso, los quejosos reclaman como contraria á las prescripciones constitucionales la detencion que

les hizo sufrir la Gefatura política desde el día 29 de Junio, y no pudieron quejarse de la resolución definitiva de 6 del actual porque esta tuvo lugar y se les notificó des pues de la presentación del escrito que dió principio á este recurso. Para justificar ese acto reclamado, la Gefatura trascribió la resolución gubernativa; y para examinar la procedencia del recurso, y si la detención viola ó no las garantías individuales, era en todo caso necesario resolver si estaba en las facultades de la Gefatura imponer como pena la detención reclamada, y si al hacerlo no usurpó atribuciones ajenas ó infringió las prohibiciones constitucionales. Los quejosos que habían sufrido ya una condena cion, y que estaban en prision desde el 19 de Junio, por solo que vieron iniciarse un nuevo procedimiento en su contra no obstante que habían sido amparados por este Juzgado, iniciaron de nuevo el recurso constitucional, pidiendo que se suspendiera la nueva orden de detención y que se les amparase contra los procedimientos de la Gefatura, ya fuese que los consignara al Juez de primera instancia, ó ya que los castigara gubernativamente. Por el auto de 7 de Julio, se mandó preguntar á los quejosos si supuesta su conformidad con el fallo pronunciado por la Gefatura el día 6, se desistían del recurso de amparo que ya se les había concedido y estaba pendiente de revisión, ó si al contrario insistían en él y en la queja que ahora examinamos; á lo que contestaron, que insistían en ambos recursos, porque no fué su intención conformarse en manera alguna con dicha sentencia; y si pidieron el término de 24 horas para optar entre la prision y la multa y de su respuesta aparece que se conformaron, fué porque no se les permitió consultar con su abogado, y su poca versacion en los negocios judiciales, no les permitió comprender las consecuencias de los términos de su contestacion. De manera que ni este Juzgado ha iniciado de oficio el recurso de amparo, ni ampliará los términos de la reclamacion, con-

siderando el fallo de la Gefatura política que se presenta como justificacion. Los informes de la autoridad ejecutora se han referido inmediatamente á ese fallo, y no es esacto por consiguiente que no haya rendido informe sobre esa resolución ni que halla irregularidad en suspender la ejecucion de ese fallo, cuando en el se impone la detención y en esta consiste el acto reclamado. En su oficio fecha 8, la Gefatura hace notar tambien que no debió comprenderse á D. José Ortiz de Rosas en la orden de suspensión, haciéndole figurar de oficio en el recurso de amparo, cuando este Sr. no lo ha entablado ni pedido en manera alguna; pero segun la minuta de la comunicacion que con la misma fecha dirigió el Sr. Lic. San Salvador á la expresada Gefatura, mandó interrogar al Sr. Rosas y por haber figurado en su primer auto lo comprendió tambien en el segundo de suspensión. Efectivamente, en este se tuvo en consideracion, que tanto el Sr. Rosas como los quejosos, fueron amparados por este Juzgado; pero en la resolución de ese mismo auto se habla en lo general de los agraviados sin mencionarlos nominalmente, y es indudable que no puede concederse al Sr. Rosas amparo que no ha solicitado ni debo tenerse presente en este recurso. Examinando pues el acto reclamado que consiste en la nueva detención ordenada por la Gefatura política, debe advertirse desde luego, que habiendo sido el fundamento de la consignacion que antes se hizo de los quejosos al Juzgado segundo de primera instancia, la razon de que debia considerarseles como responsables del impreso, por el hecho de haberlo circulado y mientras no probaran lo contrario, esa responsabilidad cuyo fundamento legal no ha llegado á aducirse, tiene para la Gefatura política una estension tan lata, que basta para imponer á los quejosos á la vez que la pena de autores, las que corresponden al impresor por falta de los requisitos legales en el impreso circulado; y la circunstancia de haber escojido para hacer uso

de la facultad gubernativa el momento mismo en que los quejosos debían salir en libertad conforme á las determinaciones de este Juzgado, ha dado ocasion á que se le atribuya el ánimo decidido de oponerse á la ejecucion de esas resoluciones. Llama tambien la atencion, que los fundamentos y considerandos del fallo de 6 del actual, sean las declaraciones de testigos para imponer una pena gubernativa, que solo procede en el caso de culpabilidad manifiesta; la asercion no fundada de que por el hecho de haberlo circulado, fuesen los quejosos responsables del impreso, y la disposicion del artículo 21 de la Constitucion para imponer un mes de prision ó cien pesos de multa. El artículo 42 de la ley de imprenta de 31 de Enero de 1868, impone por la infraccion de los requisitos que expresa, la pena de prision de 15 dias á un año, ó multa de cien á quinientos pesos; pero es indudable que solo pueden y deben observar esos requisitos los impresores y dueños de establecimientos tipográficos; la pena, por consiguiente solo procede contra estos, y la Gefatura para tener comprobada la culpabilidad de los quejosos, debió investigar si estos tenían alguna imprenta donde hubieran podido publicarse el escrito de que se trata. La circulacion de impresos no tiene requisito establecido entre nosotros y solo podría constituir falta ó delito cuando se trate de impresos condenados; pero esa responsabilidad es en todo caso muy diversa de la que tienen los impresores por contravencion á los requisitos del artículo 42 ya citado. El artículo 29 de la Constitucion previene que la autoridad política ó administrativa solo podrá imponer como correccion hasta quinientos pesos de multa ó hasta un mes de reclusion en los casos y modo que expresamente determine la ley; y entre la simple reclusion y la prision, hay una diferencia que no puede salvar la autoridad política sin infringir esa prescripcion constitucional. Conforme á ese mismo artículo, la reclusion ó la multa solo pueden imponer-

se en los casos expresamente determinados por la ley, y se infringe tambien la garantía constitucional por la imposicion de correcciones improcedentes. Segun el fallo de fecha 6, la Gefatura política procedió por medio de una informacion gubernativa á inquirir si los quejosos habian realmente circulado el impreso; y habiendo segun dice, resultado comprobada esa circulacion por haberlo encontrado en poder de los quejosos y por la declaracion de los testigos que menciona, es claro é indudable que la falta ó delito castigado por la Gefatura, es la circulacion del impreso y no la contravencion de los requisitos del artículo 42 de la ley de imprenta, en que solo pueden incurrir los impresores ó dueños de establecimientos tipográficos. Además, habiendo sido la razon única de la consignacion que la misma Gefatura hizo al Juzgado de segunda instancia, la responsabilidad consiguiente á la circulacion, es indudable tambien que castigandola gubernativamente, sujeta á los quejosos, si nó á dos juicios en forma, si á dos conminaciones por el mismo delito. La doctrina del Sr. Gutierrez que cita la Gefatura es tanto mas fundada, cuanto que la pena á que se refiere procede contra los impresores y la denuncia y condenacion de los escritos se refiere unicamente á la que corresponde á los responsables como autores. Es tambien mi opinion, que aun cuando un escrito no exeda la libertad de imprimir y publicar concedida por el artículo sétimo de la Constitucion, se contraviene á los requisitos marcados por el artículo 42 de la ley de 31 de Enero de 1868, dará lugar á la imposicion de la pena gubernativa; pero tratándose de la responsabilidad que resulta de la circulacion de un impreso, ni es aplicable la doctrina del Sr. Gutierrez, ni esa responsabilidad puede tener un doble carácter para dar lugar á dos procedimientos diversos y á dos condenaciones sucesivas. Si la Gefatura política reconoció que esa responsabilidad incumbía á las autoridades judiciales y estaba sujeta al co-

nocimiento de los Tribunales, es indudable que castigandola ahora, usurpa atribuciones ajenas. No bastando por consiguiente el fallo definitivo ni las razones alegadas para justificar la detencion y procedimientos contra los quejosos, permanecen en pie las razones porqué estos sostienen que se han violado en su persona las garantías constitucionales. En efecto, se violó la prohibicion del artículo 16 de la Constitucion, porque el Gefe político no era la autoridad competente para ordenar la detencion de los quejosos, por razon de la responsabilidad que se les imputa; y establecido por el artículo 24 de la Constitucion, que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito, los procedimientos de la Gefatura para esclarecer esa responsabilidad y su segunda condenacion, á la vez que se verifica el juicio por los Tribunales, irroga á los quejosos las molestias y perjuicios que esa prohibicion trata de evitar.

Por lo que el Promotor pide, se conceda á los quejosos el amparo de garantías que solicitan.

Cuernavaca, Julio 19 de 1873.—*Nicolás Medina.*

Es copia que certifico. Cuernavaca, Agosto 11 de 1873.—*J. Anastacio Rego*, secretario.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Agosto 11 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por los CC. José María Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael María Conde, contra la Gefatura Política de esta capital por violacion de las garantías que otorgan el artículo 16 y la segunda parte del 24 de la Constitucion Federal. Resultando: primero, que en el escrito que encabeza estos autos, los quejosos asientan que la Gefatura Política los consignó al juzgado segundo de primera instancia con la calidad de respon-

sables del impreso anónimo, mientras no probasen lo contrario. Segundo; que invocan la fraccion primera, artículo segundo de la ley de 20 de Enero de 1869, designando al ciudadano Gefe político de esta capital como violador de las garantías que otorgan los artículos antes citados, por haberlos mandado detener de nuevo al tiempo de que el ciudadano presidente del Ayuntamiento los dejaba libres de la detencion que sufrían como responsables de dicho impreso, cuya nueva detencion, presumian, tenía por objeto enjuiciarlos segunda vez por el mismo delito. Tercero; que en dicho escrito, ademas de pedir la suspension del acto reclamado, concluyen pidiendo que, previos los trámites legales, se declare en tiempo y forma que la Justicia de la Union los ampara y protege en el goce de las garantías mencionadas. Cuarto; que esto no obstante, la expresada autoridad dice en el oficio de fojas 26, que los quejosos no han pedido amparo, sino solamente la suspension de la detencion, y que el juez, C. Mariano San-salvador, se ha excedido mandando suspender el fallo definitivo de la Gefatura. Quinto; que en el oficio de fojas 11, la misma autoridad *haciendo uso del derecho que le dá la ley de amparos vigente, para informar acerca de los hechos y de las cuestiones legales que se versen* (son sus palabras,) dice que no ha juzgado ni sentenciado á los ocur-santes, sino solo los ha castigado gubernativamente en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 42 de la ley de imprenta vigente; que nadie puede llamar juicio ni sentencia á una simple informacion gubernativa, ni á la resolucion dictada en virtud de ella; que por otra parte, no se trata de un mismo delito, pues que si bien es uno mismo el impreso, en él hay diversas responsabilidades por la esencia del escrito y por la falta de los requisitos legales que debe tener. Y entrando en una regular explicacion sobre estos puntos, que llena un pliego, dice, que no ha informado sobre ellos, y pretende que se revoque la providencia

por haber sido officiosa. Sesto; que la referida autoridad dice en el oficio de fojas 13, que el C. José Ortiz de Rosas, no ha entablado este recurso de amparo sino solo sus cuatro compañeros, y que por tanto, se le hace figurar de oficio en este negocio.

Considerando: que la presuncion *juris* que tiene todo ciudadano de ser inocente, le liberta de la obligacion de probar; que sin duda para proteger esa presuncion, consigna en su artículo veinte las garantías expresadas en las fracciones primera, tercera y cuarta; que por lo mismo ha sido un atentado contra esas garantías la consignacion de los quejosos hecha por la gefatura política al juzgado segundo de primera instancia, con la calidad de responsables del impreso anónimo, mientras no probasen lo contrario; pero que esto es objeto de juicio anterior, pues en el presente consta que se procuró por la Gefatura la fuerza testimonial, aunque siempre insuficiente para imponer una pena gubernativamente, y esto aun en el caso de que dicha prueba no adoleciese de algunos vicios de que verbalmente han informado los quejosos.

Considerando: que debiendo haber sido estos puestos en libertad, á mas tardar dentro de veinticuatro horas de comunicada á la Gefatura Política la determinacion de este juzgado; con la pretension de dicha oficina de que se revocase tal determinacion (fojas 12 reverso, al fin,) la detencion arbitraria ejecutada por el ciudadano presidente municipal (fojas 1 vuelta) y la condicion inusitada de la informacion de idoneidad en la fianza de estar á derecho (fojas 2,) los agraviados sufrieron una detencion de veintisiete dias contados desde el 19 y 20 de Junio en que fueron aprehendidos, con lo cual quedó violada octuplicadamente la garantía que otorga el artículo diez y nueve del Pacto Federal.

Considerando: que prohibiendo este pacto que un individuo sea juzgado dos veces por un mismo delito, lo que ha querido es proteger la libertad atenuando el rigor y

las obligaciones, y disminuir las vejaciones inseparables de castigo; que por eso prohíbe en seguida la absolucion de la instancia que tenia lugar cuando no habiéndose descubierto la responsabilidad de un individuo en el primer juicio, podia descubrirse en el segundo, y que la presion, rigor y vejaciones dichas, subsisten castigada una falta gubernativamente, por lo que es claro que no deja de violarse el artículo veinticuatro de la Constitucion, aunque los procedimientos gubernativos no importen un juicio en forma, ni sea autoridad judicial la que procede.

Considerando: que con esa manera de castigos, no solo subsisten los inconvenientes mencionados, sino que pueden ser mas graves; porque puede acontecer que el funcionario que así castiga no entienda la ley, y que por falta de inteligencia castigue á un hombre á quien la misma ley no quiere castigar, como ha sucedido en el presente caso, pues la Gefatura Política impuso á los tenedores del impreso, ó circuladores, como ella les dice, la pena que el artículo 42 de la ley de 31 de Enero de 1868, impone solo á los impresores ó dueños de establecimientos tipográficos, con cuya inexacta aplicacion está violada la garantía que consigna el artículo 14 de la Constitucion en su parte final.

Considerando: que arreglada la peticion de los quejosos de la manera que se ha dicho en el tercer resultado, está normada á las prescripciones de la ley de amparos; que esta, fuera de lo que pueda pedirse en el alegato de que habla el artículo 13, no exige á los agraviados otra peticion; que léjos de eso, en el párrafo segundo del artículo 24, quiere que aunque las partes no agiten, el Juez siga adelante hasta pronunciar sentencia definitiva y remitir los autos á la Suprema Corte; que esto supuesto, los quejosos no han tenido necesidad de hacer peticion especial para que se suspendiese el fallo de la Gefatura, y que el juez pudo y debió suspenderla sin mas peticion que la primera, porque puede y debe hacer todo

lo que no inutilice su resolución definitiva, mientras los quejosos no se desistan del recurso intentado; que la nulidad de dicha resolución en el caso presente, era indudable si se hubiera permitido la exacción de la multa, y que continuase la captura como lo observa el ministerio público, supuesto que, como se ha dicho al principio, esta había corrido con exceso y la prisión impuesta era de un mes.

Considerando: que si Rosas no firmó el escrito con que se inició este recurso, acaso fué porque creyó ver en el hecho que lo motivó, una vejación convenida y no digna de las autoridades que se la inferían, excoitada para ilusoriar el ordenamiento de este juzgado, por lo cual la despreció y no porque quisiera continuar preso, pues de nadie se presume que quiera lo que le perjudica; y que esta haya sido la mente de Rosas, lo persuade la respuesta que dió á la notificación del decreto de 11 de Julio próximo pasado, puesto al fin de la foja cuarta vuelta, en la cual notificación se le preguntó solo si insistía en el primer amparo, y no en la queja de que proceden estas actuaciones, y por eso su respuesta á la vuelta de la foja 5, líneas 5, 6, 7 y 8, es única, sola, aislada y unitaria y está revelando bastante claro la especialidad con que se le preguntó, pues dice: «que insiste en el amparo que tiene pedido y que ha obtenido, estando pendiente solo de la revisión en la Suprema Corte de Justicia.» La cual insistencia expresada también por sus compañeros, era bastante para comprenderla en la resolución que se dictase respecto de aquellos, sin que haya procedimiento de oficio como ha parecido á la Gefatura, (fojas 11). Por estas y las demás consideraciones que quedan asentadas, se declara: Primero: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los CC. José Ortiz de Rosas, Joaquín Sarabia, José María Morgado, Luis Vega y Rafael M. Conde, contra la Gefatura política de Cuernavaca, que castigándolos gubernativamente por la falta en el im-

preso, (fojas 14), del año de la impresión, de la oficina tipográfica de donde salió, y del nombre de su propietario, viola las garantías que otorgan el artículo 14 en su parte final, el 16 y la segunda parte del 24 de la Constitución federal. Segundo: Notifíquese el fallo á los interesados; hágase saber al ciudadano promotor y sacándose las copias que deben publicarse en el «Semanario Judicial de la Federación», «Diario Oficial» del Supremo Gobierno y «Periódico Oficial del Estado,» remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

Así definitivamente juzgando lo proveyó y firmó el C. Ignacio Merelo, juez segundo suplente de Distrito del Estado de Morelos, por impedimento del interino ciudadano Lic. Mariano Sansalvador.—Doy fé.—*Ignacio Merelo.*—*José Anastasio Rego*, secretario.

Es copia que certifico. Cuernavaca. Agosto 15 de 1873.—*José Anastasio Rego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 29 de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juez de Distrito del Estado de Morelos por los CC. José María Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega, Rafael María Conde y José Ortiz de Rosas, á quien debe considerarse también como parte agraviada en la presente queja, por ser fundadas las razones que sobre este punto expone en su sentencia el Juez de Distrito, quienes exponen: Que el jurado de imprenta á que fueron consignados como responsables de la circulación de un impreso anónimo, subversivo del orden público y atentario de la vida privada, les declaró culpables sin previa citación ni defensa, por cuyo motivo, pidieron el amparo que les concedió el Juez de Distrito, en el goce de las garantías que otorgan los artículos 13, 14 y 20 fracción tercera de la

Constitucion federal, contra los procedimientos del Presidente municipal de Cuernavaca y la decision de ese jurado; pero como no obstante el amparo concedido, continuaran ellos sufriendo una detencion ilegal, interpusieron nuevo recurso; y decretada la suspension de esa detencion arbitraria, fué necesario sin embargo requerir al C. Gobernador del Estado para que previniera á las autoridades inferiores cumplieran debidamente ese mandamiento del Juez de Distrito; que despues de estas moratorias y de las que se causaron todavía con el otorgamiento de la fianza, previa informacion de idoneidad que se exigió á los quejosos por la autoridad municipal, se suspendió el acto reclamado; pero á la vez que eran puestos en libertad, se les notificó por el referido Presidente del Ayuntamiento una nueva orden de detencion, dictada por el Gefe político, fundándola en la misma responsabilidad del enunciado impreso, y con objeto de aplicarles por vía de correccion una ú otra de las penas á que se refiere el artículo 21 de la Constitucion; que contra este acto abusivo de la autoridad política interpusieron los quejosos el presente recurso, alegando que se han violado en sus personas las garantías que otorgan los artículos 16 y 24 de la Constitucion de la República.

Vistas las constancias de autos y la sentencia del referido Juez, que concedió á los quejosos el amparo pedido; estando su queja legalmente justificada, primero, porque la autoridad política no es competente para proceder en el caso de que se trata, contra los promoventes por los delitos que sin prueba suficiente se les imputa y cuyo fuero especial corresponde al jurado de imprenta, al que se les sujetó con anterioridad. Segundo: que aún suponiendo esa competencia en dicha autoridad, tampoco es legal su procedimiento, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio respectivo fuere absuelto ó fuere condenado. Tercero: porque estando pendiente en esta Corte de Justicia la revision de la

sentencia de amparo que se habia concedido á los exponentes, han debido suspenderse, entre tanto, los procedimientos seguidos contra los que interpusieron ese mismo recurso de amparo, así como no han debido iniciarse los de la autoridad política que reclaman hoy los ciudadanos referidos en esta última queja como una violacion causada en sus personas, de las garantías á que se refieren los artículos 16 y 24 de la misma Constitucion federal.

Por lo expuesto y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara lo siguiente: Se confirma por sus propios y legales fundamentos la sentencia pronunciada en Cuernavaca á 13 de Agosto próximo pasado por el Juez de Distrito, declarándose: Que la Justicia de la Union ampara y protege á los ciudadanos José Ortiz de Rosas, José María Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael María Conde, contra los procedimientos de la Gafatura política de esa Ciudad que han motivado el presente recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan José de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 27 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.